

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

La norma sometida a informe tiene por objeto la regulación integral del contrato de crédito al consumo, incorporando al ordenamiento jurídico español, tal y como señala la Exposición de Motivos, lo establecido en la Directiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CE del Consejo.

En lo que afecta a la incidencia que sobre esta materia tiene la normativa reguladora del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, son dos las cuestiones que, desde el punto de vista material, deberán tenerse especialmente en cuenta: el cumplimiento del principio de transparencia en la recogida de los datos, mediante el respeto al deber de información impuesto al responsable del fichero por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y en segundo lugar, y de forma especialmente trascendente, la necesidad de cohonestar las normas contenidas en el Anteproyecto en relación con la evaluación de la solvencia del consumidos y el acceso a las bases de datos que puedan ser una herramienta útil para tal evaluación con las normas contenidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 y en el Capítulo I del Título IV de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en relación con los ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

Asimismo, será necesario analizar si el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Anteproyecto pudiera plantear algún problema en su aplicación, teniendo en cuenta el previsto en la citada Ley Orgánica 15/1999.

II

En relación con el cumplimiento del principio de transparencia y del consiguiente deber de información al interesado, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

Asimismo, añade el artículo 5.2 que “Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior”.

Este deber de información se ve además reforzado en caso de que el responsable pretenda consultar la información referida al interesado que pudiera haber sido introducida en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito o en caso de que el responsable pretenda llevar a cabo dicha comunicación al fichero.

Así, en cuanto al primero de los supuestos, el artículo 42 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone en sus dos primeros apartados lo siguiente:

“1. Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

- a) Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún no se encuentre vencida.
- b) Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago aplazado del precio.

c) Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de facturación periódica.

2. Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los supuestos contemplados en las letras b) y c) precedentes de su derecho a consultar el fichero.”

El artículo 1 del Anteproyecto sometido a informe dispone que “por el contrato de crédito al consumo una persona físicas o jurídica en el ejercicio de su actividad, profesión u oficio, en adelante el prestamista, concede o se compromete a conceder a un consumidos un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional.

Por tanto cabe considerar que el prestamista se encontrará en el segundo de los supuestos analizados en el artículo 42.1 del Reglamento, pero para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en la legislación de protección de datos personales deberá asimismo cumplir el requisito establecido en el apartado 2 del precepto; esto es, informar al consumidor acerca de su derecho a consultar el fichero.

En segundo lugar, el artículo 39 del citado Reglamento dispone que “El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias”.

Quiere todo ello decir que dentro de la información que habrá de ser facilitada al consumidor deberá, en todo caso, hacerse referencia a la posibilidad de consultar los ficheros a los que viene haciéndose referencia, así como, en su caso, de la posibilidad de incluir los datos en los mismos en caso de no procederse al cumplimiento de las obligaciones por el consumidor y previo, en todo caso, el cumplimiento de los restantes requisitos legales previstos en el mencionado Reglamento.

Ciertamente, la Directiva 2008/48/CE impone al prestamista la obligación de informar al interesado al interesado acerca de los resultados de la evaluación realizada como consecuencia de la consulta a los fichero y los pormenores de los mismos en caso de que la solicitud de crédito resultase ser denegada, tal y como dispone su artículo 9.2, con las únicas excepciones a las que se refiere el artículo 9.3, que será analizado con más detalle en un lugar posterior.

III

Ello se traduce en el hecho de que el artículo 10 establezca, dentro de la información que deberá facilitarse al interesado “con una antelación mínima de cinco días naturales y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito” la relativa al “derecho del consumidor a ser informado de forma inmediata y gratuita del resultado de la consulta de una base de datos para la evaluación de su solvencia, conforme al artículo 15.2 (apartado 3 q) del artículo 10 citado).

Sin embargo, si bien dicha información resultaría suficiente para dar cumplimiento a lo dispuestos en el propio Anteproyecto sometido a informe, la misma resulta insuficiente para garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Por este motivo, sería necesario completar lo dispuesto en el artículo 10.2 del Anteproyecto, incorporando entre la información que habrá de facilitarse al interesado la prevista, con carácter general, en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 y, en relación con la consulta de los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, la establecida en el artículo 42 y, en su caso, la contenida en el artículo 39 del Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica.

En consecuencia, se propone añadir dos nuevas letras al artículo 10.3 del Anteproyecto, referidas al cumplimiento de ambos deberes de información:

a) La primera de ellas, que podría incluirse en cualquier lugar de la enumeración referida iría vinculada al deber general de información previsto en la Ley Orgánica 15/1999 y su tenor podría ser el siguiente:

“Los extremos exigidos por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

b) La segunda, que debería preceder inmediatamente a la establecida en la letra q) del artículo 10.3, dada su relación con la misma, tendría la siguiente redacción:

“El derecho del prestamista a consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de octubre y en el artículo 14 de esta Ley, así como en caso de incumplimiento por el consumidor de sus obligaciones, y previo el cumplimiento de los requisitos legal y reglamentariamente previsto, a comunicar los datos referidos al impago a aquellos ficheros”.

IV

Hechas estas precisiones, debe ahora hacerse referencia a otras previsiones contenidas en el Anteproyecto y relacionadas con el deber de información que pudieran resultar influidas por la consideración que acaba de efectuarse.

En este sentido, el apartado 5 del artículo 10 considera cumplidos los requisitos establecidos en la Ley en caso de que se facilite al interesado la información normalizada europea sobre el crédito al consumo. Del mismo modo, conforme al artículo 10.6, en caso de comunicación a través de telefonía vocal, se indica que la información deberá incluir al menos los elementos considerados en las letras c), d), e), f) y h) del artículo 10.3 junto con la tasa anual equivalente.

En relación con tales previsiones, debe señalarse claramente que su cumplimiento podrá implicar el respeto a las normas específicas reguladoras del contrato de crédito al consumo, pero que las mismas no implican necesariamente el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, cuyos preceptos imponen imperativamente al responsable, en este caso el prestamista, el cumplimiento de las obligaciones de información que se vienen analizando a lo largo de este informe.

Sin embargo, la dicción de los preceptos a los que se ha hecho referencia podría inducir a la confusión de que el mero cumplimiento de las previsiones de los artículos 10.5 y 10.6 del Proyecto exoneraría al prestamista del cumplimiento de cualquier deber de información, por lo que se hace necesario que el Anteproyecto prevea expresamente que sus disposiciones únicamente hacen referencia a los deberes de información exigibles para la licitud del contrato.

Por este motivo, se considera necesaria la inclusión en el artículo 10 de un nuevo apartado en que se señale que **“Lo dispuesto en los apartados 5 y 6 de este artículo deberá entenderse sin perjuicio del necesario cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y sus disposiciones de desarrollo”**.

Las garantías a las que se ha venido haciendo referencia, por otra parte, deberán ser igualmente tenidas en cuenta en el régimen previsto en el artículo 12 en relación con los contratos de crédito en forma de posibilidad de descubierto.

Así, deberían incorporarse al apartado 2 del citado artículo dos previsiones similares a las que se ha propuesto con anterioridad en relación con el cumplimiento por el prestamista de las obligaciones establecidas en los



artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999 y 39 y 42 de su Reglamento de desarrollo.

Igualmente, sería necesario que el precepto incorporase un apartado adicional similar al propuesto en el artículo 10 en relación con las previsiones establecidas en los apartados 4 y 8 del artículo 12, similares a los artículos 10.5 y 10.6 del Anteproyecto, siendo así su redacción la siguiente:

“Lo dispuesto en los apartados 4 y 8 de este artículo deberá entenderse sin perjuicio del necesario cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y sus disposiciones de desarrollo”.

V

Debe a continuación hacerse referencia al régimen establecido en el Anteproyecto en relación con la obligación de enjuiciamiento de la solvencia del consumidor y la posible consulta de lo que el texto denomina, siguiendo el tenor de la Directiva 2008/48/CE “bases de datos”. Si bien ambos preceptos se encuentran recogidos en dos preceptos que, aún siendo correlativos, se encuentran insertos en capítulos distintos del Anteproyecto, su estudio, en cuanto incide en el régimen regulador de los ficheros de solvencia patrimonial y crédito y, en particular, el acceso a los mismos por parte del prestamista, debe efectuarse de forma conjunta.

Según el artículo 14.1 del Anteproyecto, “el prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédito, deberá evaluar la solvencia del consumidos sobre la base de una información suficiente, obtenida por los medios que considere necesarios, entre ellos la información facilitada por el consumidos. Con igual finalidad podrá consultar las correspondientes bases de datos”, debiendo este análisis reiterarse en caso de modificación del importe total del crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2.

En relación con la segunda de las posibilidades otorgadas por el artículo 14.1, el artículo 15 establece determinadas reglas relacionadas con el acceso a bases de datos, aclarando en su apartado 1 que los ficheros de titularidad privada sobre solvencia patrimonial y crédito están sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, a las normas que lo desarrollen y a lo establecido en este artículo”.

El régimen previsto en dicho precepto, por tanto, completará el previsto por la propia Ley Orgánica 15/1999 y sus normas de desarrollo que, en todo caso y por mandato del artículo 15.1 quedarán plenamente vigentes.

Las adiciones efectuadas por el artículo 15 del Anteproyecto se limitan a establecer, por una parte, la obligación de informar al interesado acerca de la



consulta efectuada, de forma inmediata y gratuita, en caso de que la denegación de la solicitud de crédito se base en la consulta de los ficheros, con las excepciones previstas en el apartado 3 y, por otra, la prohibición de que los responsables de los ficheros de solvencia patrimonial y crédito impongan a los prestamistas de otros Estados miembros de la Unión Europea cualquier condición discriminatoria para el acceso a los ficheros. Fuera de estas previsiones, que en principio no resultan contradictorias con lo dispuesto en la legislación de protección de datos, deberá estarse a lo previsto en ésta última.

Las normas a las que se ha hecho referencia son el resultado de incorporar al derecho español los artículos 8 y 9 de la Directiva 2008/48

Según el primero de estos preceptos “los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación exija que los prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta obligación”. Además, “los Estados miembros velarán por que, si las partes acuerdan modificar el importe total del crédito tras la celebración del contrato de crédito, el prestamista actualice la información financiera de que disponga sobre el consumidor y evalúe su solvencia antes de aumentar significativamente el importe total del crédito”.

Por su parte, conforme dispone el artículo 9 de la Directiva:

“1. Cada Estado miembro garantizará que los prestamistas de los demás Estados miembros tengan acceso a las bases de datos utilizadas en su territorio para la evaluación de la solvencia de los consumidores. Las condiciones de acceso deberán ser no discriminatorias.

2. Si la denegación de una solicitud de crédito se basa en la consulta de una base de datos, el prestamista informará al consumidor inmediata y gratuitamente de los resultados de dicha consulta y de los pormenores de la base de datos consultada.

3. La información deberá facilitarse a menos que esté prohibido por otras disposiciones de la legislación comunitaria o sea contrario a objetivos de orden público o de seguridad pública.

4. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.”

VI

Como punto de partida, debe señalarse que la propia Directiva prevé que la consulta a los ficheros o bases de datos pertinentes deberá realizarse con respeto a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE. En consecuencia, el acceso habilitado por la Ley española deberá también resultar respetuoso con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, norma que transpone al derecho español la citada Directiva.

En este sentido, como ya se ha indicado, el artículo 15.1 del Anteproyecto establece una regla general de sometimiento a la legislación de protección de datos de los mencionados ficheros. De este modo, sólo será posible la inclusión en los ficheros de los datos cuando se cumplan los requisitos del artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, deberá notificarse al interesado la mencionada inclusión, conforme exigen los artículos 29.2 de la Ley Orgánica y 40 del Reglamento, los datos sólo podrán conservarse en los términos previstos en los artículo 29.4 de la Ley Orgánica y 42 del Reglamento y deberán concederse a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición, conforme a lo dispuesto en los artículos 29.3 de la Ley y 44 del Reglamento.

Además, como se indicó en un lugar anterior de este informe, para que la consulta del fichero sea lícita el consultante deberá encontrarse en uno de los supuestos previstos en el artículo 43 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y haber informado además previamente al interesado de su derecho a consultar el fichero.

Quiere todo ello decir que la Directiva no impone una obligación incondicional de que existan este tipo de ficheros ni de que los mismos sean necesariamente consultados sin cumplir previamente los requisitos legalmente exigibles para ello, sino que los prestamistas podrán valorar la solvencia del consumidor “cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente”.

Por tanto, la consulta a las bases de datos debería resultar conforme a las normas de protección de datos y se realizará “cuando proceda”. La única norma que imperativamente impone la Directiva es la de que deberá garantizarse la no discriminación de los prestamistas ubicados en otro Estado miembro, de forma que su acceso deberá garantizarse en las mismas condiciones que establezca la legislación para los prestamistas nacionales de ese Estado, que el Anteproyecto recoge en su artículo 15.4.

Teniendo todo esto en cuenta, la expresión contenida en el artículo 14.1 del Proyecto, según la cual el prestamista “podrá consultar las correspondientes bases de datos”, identificadas en el artículo 15.1 como ficheros de solvencia patrimonial y crédito, podría inducir a cierta confusión, por

cuanto parece establecer una habilitación incondicional para el acceso a las bases de datos por parte de los prestamistas, siendo así que dicho acceso solamente podrá tener lugar, en los términos, con los requisitos y con las garantías establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Al propio tiempo, como se ha indicado, el Anteproyecto identifica en su artículo 15.1 las “bases de datos” a las que se refiere la normativa reguladora del contrato de crédito al consumo con los ficheros de solvencia patrimonial y crédito regulados por el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999.

Ciertamente la reproducción literal de los preceptos de las Directivas comunitarias resulta beneficiosa, siempre que ello sea posible, en aras a garantizar una adecuada transposición de dichas normas al derecho interno. Sin embargo, en el supuesto al que ahora nos referimos, la inclusión de una categoría jurídica denominada “base de datos” como distinta nominalmente a los ficheros de “solvencia patrimonial y crédito” regulados como tales en nuestro ordenamiento jurídico al menos desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1992, podría introducir cierta confusión en el destinatario de la norma, máxime cuando el artículo 15.1 del Anteproyecto viene a asimilar ambos conceptos y el artículo 29.4 de la Ley Orgánica 15/1999 define como finalidad esencial de los ficheros de solvencia patrimonial y crédito el enjuiciamiento de la solvencia del deudor (objeto de la consulta según el artículo 14.1 del Anteproyecto) cuando indica en su primer inciso que “sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados”.

Por todo ello, sería necesario modificar el último inciso del artículo 14.1 del Anteproyecto, estableciendo que:

“Con igual finalidad, podrá consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, en los términos y con los requisitos y garantías previstos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo”.

VII

Entrando ya en el estudio del artículo 15 del Anteproyecto, debe indicarse en primer lugar que **procedería la modificación de su rúbrica, reemplazando la expresión “bases de datos” por “ficheros de solvencia patrimonial y crédito”** por las razones que se han expuesto en el apartado anterior.

Debe asimismo indicarse que la referencia expresa a estos ficheros no supone una limitación de los ficheros a los que podrán acceder los

prestamistas dado que, en primer lugar, el propio Anteproyecto asimila las bases de datos del artículo 9 de la Directiva con esta categoría de ficheros.

Del mismo modo, debe recordarse nuevamente que la Directiva hace referencia en este punto a las “bases de datos” creadas para enjuiciar la solvencia del consumidor, lo que en nuestro derecho, se reitera, se asimila a los ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

Por último, el hecho de el Capítulo III hiciera referencia a los ficheros de solvencia no implicaría una merma de la posibilidad del prestamista, en caso de revestir los caracteres legalmente exigibles pudiese, para comprobar la solvencia del consumidor, acudir a la información contenida en otros ficheros, como la central de información de riesgos del Banco de España, en los términos establecidos en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas para la reforma del sector financiero, toda vez que esta Ley establece las condiciones de acceso a la información y legitima a los sometidos a la misma para verificar dicho acceso si se cumplen los requisitos que la misma establece claramente.

En todo caso, si se considerase necesario, sería posible igualmente modificar la rúbrica del Capítulo II reemplazando la expresión “bases de datos” por “ficheros”, dado que este es el término legalmente empleado en nuestro ordenamiento para definir los conjuntos estructurados de datos en que las bases de datos a las que se refiere el artículo 9 de la Directiva consisten.

VIII

En cuanto a la obligación impuesta al prestamista por el apartado 2 del Anteproyecto, debe señalarse que tal deber habrá de interpretarse como independiente de lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “en los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores cuando el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos”, así como del ejercicio por el interesado de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos por la Ley Orgánica 15/1999 y singularmente por el artículo 44 de su Reglamento de desarrollo, toda vez que ambas normas son plenamente aplicables a estos ficheros y así lo indica expresamente el artículo 15.1 del Anteproyecto.

El artículo 15.3 del Anteproyecto, exceptúa el deber especial de información al afectado al que se refiere el artículo 15.2 los supuestos en que “una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa así lo prevea o sea contrario a objetivos de orden público o de seguridad pública”.

Como se dijo, esta excepción proviene de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Directiva, según el cual “la información deberá facilitarse a menos que esté prohibido por otras disposiciones de la legislación comunitaria o sea contrario a objetivos de orden público o de seguridad pública”.

Esta limitación, en principio no plantearía especial problema en cuanto se referiría, en principio, a un derecho adicional a los ya contenidos en la normativa de protección de datos. Sin embargo, su alcance podría afectar igualmente al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que el interesado quisiese ejercitar en relación con el tratamiento de los datos resultantes de la consulta al fichero, por cuanto para que fuera admisible la limitación del derecho del interesado esa limitación debería ser conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

El apartado 29 de la Exposición de Motivos de la Directiva trata de aclarar el alcance de esta restricción, indicando que “cuando la decisión de denegar una solicitud de crédito se fundamente en la consulta de una base de datos, el prestamista debe informar de ello al consumidor, así como de los pormenores de la base de datos consultada. Sin embargo, el prestamista no debe estar obligado a proporcionar dicha información cuando así lo prohíban otras disposiciones de la legislación comunitaria como, por ejemplo, las disposiciones sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Además, dicha información tampoco debe facilitarse cuando ello sea contrario a objetivos de orden público o de seguridad pública, como son la prevención, investigación, detección y represión de delitos penales”.

Ello plantea algunos problemas derivados de la propia naturaleza y alcance de las “bases de datos” a las que se refiere el artículo 15 del Anteproyecto, por cuanto respecto de las mismas la legislación de protección de datos no establece limitación alguna al ejercicio de los derechos por parte del interesado. De este modo, si como hemos venido analizando, el artículo 15 hace referencia a los ficheros de solvencia patrimonial y crédito no sería posible establecer una limitación como la prevista en el artículo 15.3, dado que dicho ficheros no pueden identificarse con los establecidos en el Proyecto de Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de los que sí operan las limitaciones que se han indicado y que aparecen recogidas en el Proyecto y vinculadas a la obligación de no informar al interesado acerca del tratamiento de sus datos derivadas del artículo 24 del Proyecto, informado en su día por esta Agencia Española de Protección de Datos.

Del mismo modo, el legislador ha considerado que las limitaciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición derivadas de la protección del orden público y la seguridad pública sólo operarán, respecto de los ficheros de titularidad pública, en los supuestos establecidos en los artículos 23 y 24 (éste último en la redacción resultante de

la Sentencia del tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre) de la Ley Orgánica 15/1999.

Esta Agencia es consciente de que en los supuestos en los que una norma de derecho interno tiene por objeto la incorporación de una Directiva comunitaria puede resultar conveniente, a efectos de acreditar la adecuada transposición de la misma, reproducir en la medida de lo posible su contenido. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que, conforme a lo que se ha indicado anteriormente, los derechos de los afectados no aparecen limitado en el derecho español en relación con los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, siendo así que la previsión del artículo 15.3 podría implicar una limitación al ejercicio por el interesado de tales derechos en cuanto el tratamiento se realice con la finalidad de enjuiciar la solvencia del consumidor.

Por otra parte, los artículo 30 y 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 establecen los supuestos en los que podrá ser denegado al interesado el ejercicio de los derechos, en el bien entendido de que, como reiteradamente se ha indicado, tales preceptos no operan, en principio, en relación con los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Así, según los dos primeros apartados del artículo 30:

“1. El responsable del fichero o tratamiento podrá denegar el acceso a los datos de carácter personal cuando el derecho ya se haya ejercitado en los doce meses anteriores a la solicitud, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

2. Podrá también denegarse el acceso en los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.”

A su vez, el artículo 33, también en sus dos primeros apartados:

“1. La cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los datos.

2. Podrá también denegarse los derechos de rectificación o cancelación en los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.”

En este sentido, debe recordarse que las excepciones establecidas en el mencionado Reglamento tenían por objeto conciliar la normativa de protección

de datos con la que expresamente declaraba una prohibición de información al interesado, como la reguladora de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a la que expresamente se refiere la Directiva en el apartado 29 de su Exposición de Motivos como fundamentadora del artículo 9.3 al que venimos haciendo referencia.

Teniendo en cuenta la similitud que existe entre los artículos 30.2 y 33.2 del Reglamento y el artículo 15.3 del Anteproyecto sometido a informe, y sin perjuicio de las observaciones que se han venido indicando en relación con los ficheros de solvencia patrimonial y crédito **se propone o bien suprimir el mencionado artículo 15.3 o bien reemplazarlo por el siguiente texto:**

“La información a la que se refiere el apartado anterior no se facilitará al consumidor en los supuestos en que no procediera atender, conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal, su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición.”

IX

Debe hacerse, por último, referencia al régimen sancionador establecido en el Capítulo VII del Anteproyecto y en particular a lo previsto en el artículo 34, según cuyo apartado 1 el incumplimiento de las disposiciones de la Ley por personas físicas o jurídicas distintas de las previstas en el apartado 2, que se refiere a su vez a las entidades de crédito será sancionado conforme a la legislación de consumo y en particular conforme al Texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. En el caso de las entidades de crédito será de aplicación lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito.

Añade el párrafo segundo del apartado 1 que “no obstante, el incumplimiento de las disposiciones relativas a la información previa al contrato, según establece el artículo 10 y la obligación de evaluar la solvencia del consumidor, prevista en el artículo 14 se considerarán como infracciones graves siempre que las infracciones no tengan carácter ocasional o asilado, pudiendo ser, en su caso, consideradas como infracciones muy graves atendiendo a los criterios previsto en el artículo 50 del citado real decreto Legislativo.

Como se ha dicho, esta Agencia considera necesario que en la información facilitada al consumidor con carácter previo a la celebración del contrato se incluya la relativa al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la referida a la posible consulta de los ficheros de solvencia

patrimonial y crédito o la inclusión de sus datos en los mencionados ficheros en caso de no producirse el pago de las obligaciones.

De este modo, la no inclusión de dicha información, en caso de ser estimada la consideración efectuada por esta Agencia podría dar lugar, en principio a una vulneración de lo dispuesto en el Anteproyecto y en la propia normativa de protección de datos, que debería, en principio ser sancionada bien por ésta última bien por las normas citadas, respectivamente y en atención a la naturaleza del infractor, en los dos primeros apartados del artículo 34 del Proyecto.

Se plantearía así el problema de que una misma acción puede resultar constitutiva de diversas infracciones tipificadas en la normativa reguladora de la protección de datos y las citadas en dicho precepto, planteándose una posible vulneración del principio “non bis in ídem”. A nuestro juicio, debe entenderse que debe prevalecer el tipo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 en cuanto los deberes de información, aún previéndose en el Anteproyecto, se refieran a obligaciones establecidas expresamente en la citada Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, dado su carácter de Ley especial reguladora de la materia.

Por este motivo, esta Agencia considera necesario que se complete el artículo 34 del Anteproyecto con una disposición tendente a evitar la posible existencia de un “bis in ídem”, estableciéndose así que:

“Cuando el incumplimiento de los deberes de información a los que se refiere el artículo 10 de esta Ley fuera constitutivo de infracción tipificada en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será de aplicación el régimen de esta última, correspondiendo la competencia en materia sancionadora a la Agencia Española de Protección de Datos.”